

Mayo 3 de 1948

2ª REUNION — 1ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora  
Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbo y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

Aldrich, Oscar E.  
Alvarez Peraza, Manuel  
Ailub, Rosendo  
Argaña, José M.  
Astorgano, José  
Atala, Luis  
Aynia López Torres, Francisco  
Bagnasco, Vicente  
Baibin, Ricardo  
Benítez, Antonio J.  
Beretta, Eduardo  
Bernárdez, Manuel  
Bidegain, Oscar R.  
Bonassola, Romeo E.  
Bonino, Alberto C.  
Brugnera, Juan N. D.  
Bruno, Domingo  
Bustos Pierra, Raúl  
Butterfield, Humberto  
Cámpora, Héctor J.  
Candiani, Alberto M.  
Cano, José  
Carreras, Ernesto A.  
Cassas Nobleng, Armando  
Cattaneo, Attilio E.  
Celam, Eduardo  
Cento Grand, José Amadeo  
Córdova, J. Salvador  
Curohod, Amado J.  
Cusack, Roberto Enrique  
Dávila, Anibal J.  
Decker, Rodolfo A.  
De la Torre, Juan  
Del Carpi, Emilio Donato  
Del Maso, Gabriel  
Dellepiane, Luis  
Diaz, Carlos A.  
Diaz, Manuel M.  
Dri, Roberto  
Estrada, Angel G.

Fajre, José Benito  
Fernández, Hernán S.  
Ferrando, Manuel P.  
Ferrer, Modesto  
Filippo, Virgilio M.  
Fortesa, Eduardo Julio  
Frogoset, Luis J.  
Frondizi, Arturo  
Garaguso, Bernardino Hipólito  
Garay, Marcelino S.  
García, Manuel  
Gil Flood, Mario  
Giménez Vargas, Francisco  
González Pines, Tomás  
Guardo, Ricardo C.  
Harambours, Horacio  
Ibarra, Prudencia M.  
Lagraña, Héctor D.  
Larso, Ricardo  
Laskar, Guillermo F.  
Lavia, Ludovico  
Lator, Alejandro H.  
Lema, Manuel E.  
Lelamendi, Nubino (h.)  
Lionaga, Félix J.  
López Berrot, Oscar  
Lucini, Raúl Felipe  
Malecek, José Enrique  
Mántaras, Manuel J.  
Macistegui, Angel S.  
Marini, Angel C.  
Marulla, José  
Martínez Querezo, Guillermo  
Martínez Luque, Enrique  
Maroñas, Emil E.  
Messina, Humberto  
Miel Anquila, Angel J.  
Monjardín, Federico F.  
Montes, Juan Manuel  
Montes de Oca, Carlos  
Manile, Alcides E.  
Moreno, José Luis

Noriega, Juan J.  
Novellino, Francisco  
Ottolenta, Benito J.  
Palacio, Ernesto  
Parry, Roberto  
Pasquini, Juan Domingo  
Pasquini, José P. D.  
Pastor, Reynaldo A.  
Pereira, Pedro J.  
Pereyra, Luis Alberto  
Pirani, Antonio S.  
Pentieri, Silverio  
Rahonal, Francisco  
Rionegro, Roberto  
Roche, Luis Armando  
Rodríguez, Manuel  
Rodríguez, Mario M.  
Rodríguez Araya, Agustín  
Rodríguez de la Torre, Raúl  
Rojas, Abanida  
Rojas, Mario  
Rossi, José  
Rougier, Valerio S.  
Rumblo, Eduardo I.  
Sammartino, Ernesto E.  
Sanchez, Pedro  
San Martín, Ricardo Antonio  
Saporiti, Luis  
Saravia, Teodoro S.  
Sarmiento, Manuel  
Secher, Carlos Manuel  
Silvestre, Adolfo J. H.  
Sohral, Antonio  
Solá, Fernando  
Sonevra, Eusebio  
Tajada, Ramón Washington  
Tilli, Pedro  
Tommasi, Victorio M.  
Toro, Ricardo  
Urtiaga Bilbao, Mateo de  
Valdez, Celestino  
Vanasco, Julio A.

Vasco, Isidoro  
Vellase Colombes, Manuel F.  
Vergara, Amado  
Villacorta, Luis René  
Villafañe, José María  
Vico, José Emilio  
Zamudio, Juan Carlos  
Zanoni, Pedro F.  
Zavala Ortiz, Miguel Angel

AUSENTES, CON LICENCIA:

Reynés, Leandro R.  
Viaschi, Albino

AUSENTE, CON AVISO:

Arlos, Ricardo E.  
Camus, Rley P.  
Cleve, Ernesto  
Cooke, John William  
Cufre, Orlando B.  
Degroot, Juan Ramón  
Hiro, Saturnino S.  
Gila, Arturo U.  
Mac Kay, Luis R.  
Mallari, D. Jacinto  
Ocinola, Rafael  
Pérez Martín, José  
Pierotti, Mario  
Pinto, Angel L.  
Repello, Agustín  
Rudi, Ricardo  
Santander, Silvano  
Uranga, Raúl L.  
Vilola, Alfredo R.  
Yadavala, Mauricio L.

ELECTO, AUSENTE CON AVISO:

Diaz de Vivar, Joaquín  
Rubina, Sidney Nicolás

SUMARIO

1.—Versiones taquigráficas.

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que remite copia del decreto de apertura del período ordinario de sesiones del Honorable Congreso.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo, en que da cuenta del ejercicio de la facultad de disminuir gravámenes establecidos por leyes de impuestos internos.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: regularización de ventas de tierras efectuadas por el gobierno nacional de acuerdo con la ley 5.559, de fomento de territorios nacionales.

- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: ampliación del préstamo acordado a la Dirección General de Obra Social del Ministerio de Marina.
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: aprobación de inversiones de fondos efectuadas por la Universidad Nacional de Córdoba en la ejecución del presupuesto correspondiente a 1945.
- VI.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que devuelve, observado el artículo 2º, el proyecto de ley 13.046 sobre régimen de créditos para obras públicas.
- VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: supresión del requisito de la escritura pública para perfeccionar transferencias de inmuebles adquiridos por el Estado.
- VIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: enajenación de un inmueble de propiedad nacional situado en la provincia de Santa Fe.
- IX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: modificación del artículo 1º de la ley 12.828, de repatriación de argentinos indigentes.
- X.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que devuelve, observados los artículos 47 (bis) y 55, el proyecto de ley 13.031, de régimen universitario.
- XI.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que somete a consideración del Honorable Congreso las modificaciones introducidas al reglamento general de tránsito para los caminos y calles de la República.
- XII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declaran de Reserva Nacional «Lorenzo S. Kenny» tierras situadas en el territorio de La Pampa donadas por el señor Enrique T. Kenny.
- XIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: otorgamiento de préstamos para obras sociales de la Secretaría de Aeronáutica y del Ministerio de Hacienda, y reglamentación a la Obra Social del Ministerio de Hacienda.
- XIV.—Mensaje del Poder Ejecutivo: aplicación de las disposiciones del decreto 8.718/38, sobre atención de pedidos de informes y antecedentes formulados por las Cámaras legislativas.
- XV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: ampliación del crédito para trabajos públicos y transportes, concedidos por la ley 12.906, de financiación de obras y trabajos públicos.
- XVI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: ratificación de la garantía de la Nación acordada al Banco Central de la República Argentina para facilitar la concesión de préstamos a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires.
- XVII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: creación de becas en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown.
- XVIII.—Mensajes del Poder Ejecutivo con los que remite informes de los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Corrientes, con respecto a investigaciones de conexiones eléctricas.
- XIX.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que remite expedientes del Ministerio del Interior relativos a actuaciones administrativas o judiciales sobre investigaciones en la sucesión Bemberg.
- XX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: erección de un monumento denominado «Faro del Libertador» en el campamento de El Plumerillo, provincia de Mendoza, en conmemoración de la epopeya libertadora.
- XXI.—Mensajes del Poder Ejecutivo con que remite copias del decreto de convocatoria para el 27 de diciembre de 1947 a sesiones extraordinarias del Honorable Congreso, y del decreto por el que las declara terminadas.
- XXII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: aprobación de excesos de inversión de la Fábrica Nacional de Envases Textiles de Resistencia.
- XXIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se da autorización a la Administración General de Correos y Telecomunicaciones para constituir un fondo de reserva para renovación de equipos de telecomunicación adquiridos de conformidad con la ley 13.011.
- XXIV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: modificación de la ley 11.275, de identificación de mercaderías de fabricación nacional.

- XXV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: modificación del artículo 193 del decreto ley 28.663/45 (ley 12.011), orgánico de la Aeronáutica.
- XXVI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: construcción de edificio para la Dirección General de Construcciones Terrestres del Ministerio de Marina.
- XXVII.—Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que remite copia de informes producidos por el gobierno de la provincia de San Luis, referentes a servicios eléctricos expropiados en dicha provincia.
- XXVIII.—Mensaje del Poder Ejecutivo, con el que remite la memoria y balance de la Cooperativa Eléctrica de Concarán, provincia de San Luis.
- XXIX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: autorización a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica para atender las erogaciones que origina la aplicación del escalafón.
- XXX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: reglamentación del vuelo en las zonas de riesgo, de peligro y de vuelo prohibido.
- XXXI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: ampliación de créditos para trabajos públicos en 1948.
- XXXII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: aprobación de las mayores inversiones de la Flota Mercante del Estado en la ejecución de los presupuestos correspondientes a 1944 y 1945.
- XXXIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: crédito extraordinario al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para atender los gastos de la delegación argentina a la IX Conferencia Internacional Americana.
- XXXIV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: autorización a la municipalidad de Rosario para ocupar una fracción de terreno de propiedad nacional.
- XXXV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: crédito suplementario para reforzar partidas del presupuesto general de gastos para 1948 del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
- XXXVI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: intervención del Banco Central de la República Argentina en las operaciones de títulos nacionales que realicen las sociedades de economía mixta.
- XXXVII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: modificación del artículo 5º de la ley 12.723, de censo escolar de la Nación.
- XXXVIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: organización general de la Nación para tiempo de guerra.
- XXXIX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: créditos extraordinarios a la Presidencia de la Nación y a ministerios y secretarías de Estado para refuerzo de las asignaciones del presupuesto para 1948.
- XL.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- XLI.—Comunicaciones oficiales.
- XLII.—Comunicaciones de señores diputados.
- XLIII.—Petitiones particulares.
- XLIV.—Proyecto de ley del señor diputado Rojas (A.): construcción de edificio para el Museo Arqueológico de Santiago del Estero.
- XLV.—Proyecto de ley del señor diputado Visca: prohibición de actividades de carácter comunista.
- XLVI.—Proyecto de ley del señor diputado Mac Kay: denuncia y profilaxis de la brucelosis.
- XLVII.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: creación de un acuario público y laboratorios anexos en Mar del Plata.
- XLVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Decker: subsidio a la Sociedad de Damas de Caridad, de la Capital Federal.
- XLIX.—Proyecto de ley del señor diputado García: implantación del espectáculo vivo en las salas cinematográficas.
- L.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: subsidio a la Escuela Profesional Monseñor José A. Orzelli, de Capitán Lazo, provincia de San Juan.
- LI.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: modificación de los plazos para la declaración de la ausencia con presunción de fallecimiento.
- LII.—Proyecto de ley del señor diputado Ferrer: Código del Niño.

- LIII.—Proyecto de ley del señor diputado Cleve, por el que se declara plaga nacional el pulgón verde de los cereales.
- LIV.—Proyecto de ley del señor diputado Colom: modificación del artículo 4º de la ley 13.010, de derechos políticos de la mujer.
- LV.—Proyecto de ley del señor diputado Colom: reforma de la Constitución nacional.
- LVI.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento: provisión de aguas corrientes e instalación de redes cloacales en San Pedro, provincia de Jujuy.
- LVII.—Proyecto de ley del señor diputado Curochod: adquisición de tierras por arrendatarios o aparceros.
- LVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: creación de la Dirección Nacional de Turismo.
- LIX.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: expropiación de terreno para la Escuela Superior de Comercio de La Plata.
- LX.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Fregossi: jurisdicción de la Nación en tierras adquiridas en las provincias.
- LXI.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: creación de una escuela técnica en Tolosa, provincia de Buenos Aires.
- LXII.—Proyecto de ley del señor diputado Bustos Fierro: expropiación de inmuebles en la ciudad de Córdoba, destinados a obras de embellecimiento de la Iglesia, Catedral.
- LXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Sammartino: protección de los animales.
- LXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: edificio para la Biblioteca Popular Sociedad Franklin, de San Juan.
- LXV.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: subsidio a la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, en la provincia de San Juan.
- LXVI.—Proyecto de ley del señor diputado Albrieu y otros: obras de captación y distribución de agua en la provincia de La Rioja.
- LXVII.—Proyecto de ley del señor diputado Curochod: subsidio al Tiro Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
- LXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Pontieri: edificio destinado a oficinas públicas nacionales en La Plata.
- LXIX.—Proyecto de ley del señor diputado Curochod: subsidio a la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
- LXX.—Proyecto de ley del señor diputado Curochod: oficialización del jardín de Infantes Clodomira S. Vera, de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
- LXXI.—Proyecto de ley del señor diputado Montiel: expropiación de terrenos en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, destinados a la Escuela Técnica de Oficiales Coronel Enrique Mosconi.
- LXXII.—Proyecto de ley del señor diputado de la Torre: subsidio al comité ejecutivo del Primer Congreso Argentino de Filosofía.
- LXXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Díaz (M.): subsidio al Club Atlético Guadalupe, de la provincia de Santa Fe.
- LXXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Díaz (M.): creación de escuelas hogares en la provincia de Santa Fe.
- LXXV.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: adquisición de obras del pintor Vito Dumas.
- LXXVI.—Proyecto de ley del señor diputado Lloaaga: ensanche del camino de la Capital Federal a Mar del Plata.
- LXXVII.—Proyecto de ley del señor diputado García: subsidio a entidades deportivas afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino.
- LXXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
- LXXIX.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: autorización a la Sección Ley 10.650 del Instituto Nacional de Previsión Social, para acordar pensión a la señora Segunda Ludueña de Altamirano.
- LXXX.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: nacionalización de servicios públicos.
- LXXXI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: provincialización de los territorios de

La Pampa, Chaco, Formosa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Misiones.

- LXXXII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: estatuto del magisterio.
- LXXXIII.—Proyecto de ley reproducido por los señores diputados Sammartino y Mántaras: derogación de la ley 4.144, de extrañamiento de extranjeros.
- LXXXIV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: estatuto del servicio doméstico.
- LXXXV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: modificación de las leyes 11.833 y 12.338, de maternidad.
- LXXXVI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: obras de embalse en Tipliro (Santiago del Estero).
- LXXXVII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: nacionalización de servicios de electricidad.
- LXXXVIII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: reglamentación sobre prerrogativas de funcionarios públicos y tributación de honores y homenajes.
- LXXXIX.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: creación del Consejo Nacional de Educación Secundaria.
- XC.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: modificación del artículo 8º de la ley orgánica militar 4.707, en cuanto al cómputo de servicios prestados durante el estado de sitio.
- XCI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: régimen legal de la propiedad horizontal.
- XCII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: régimen legal de responsabilidad por accidentes del trabajo.
- XCIII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: reducción y suspensión de derechos aduanaeros que gravan la introducción de automotores, implementos de trabajo y materiales de construcción.
- XCIV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: sueldos y condiciones de trabajo del personal obrero de la Dirección de Limpieza de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- XCIV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: subsidio para obras del hospital municipal José María Gómendio, de Ramallo (Buenos Aires).
- XCVI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: restauración de ruinas jesuíticas y construcción de hosterías en Santa Ana, Loreto y San Ignacio (Misiones).
- XCVII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: reforestación de plantas tánicas y fomento de la industria de la curtición.
- XCVIII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: carácter laico de la enseñanza.
- XCIX.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: libre comercio en la exportación de carne, fomento de la ganadería y expropiación de frigoríficos.
- C.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: subsidio al hospital municipal José María Gómendio, de Ramallo (Buenos Aires).
- CI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: jubilación de empleados municipales que desempeñan tareas insalubres.
- CII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: adquisición de aviones sanitarios e instrumental para servicios médicos.
- CIII.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: modificación del artículo 1º de la ley 9.675, en lo referente a escalafón para suboficiales.
- CIV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: modificación de la ley 11.544, en lo referente a la jornada de trabajo en tareas insalubres.
- CV.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Sammartino: Código del Niño.
- CVI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Rodríguez (M.): subsidio a las mutualidades.
- CVII.—Proyecto de ley del señor diputado del Carril y otros: caducidad de decretos leyes dictados por el Poder Ejecutivo de facto y no ratificados por ley.
- CVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Cattáneo: creación de la Escuela de Suboficiales del Ejército aspirantes a oficial.

- CIX.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento: creación de centros cooperativos de orientación y enseñanza agropecuaria posescolar en escuelas rurales dependientes del Consejo Nacional de Educación.
- CX.—Proyecto de ley de los señores diputados Tommasi y Fregossi: pensión a la señorita Guadalupe Alejandrina Moreda.
- CXI.—Proyecto de ley de los señores diputados Fregossi y Tommasi: instalación del Instituto de Aeronáutica, dependencia de la Facultad de Ciencias Físicomatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata.
- CXII.—Proyecto de ley del señor diputado Sammartino: creación de la Caja Nacional de Previsión Social y Jubilaciones del gremio de vendedores de diarios y revistas.
- CXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Ayala López Torres: creación de un internado, anexo al colegio nacional de Rafaela, provincia de Santa Fe.
- CXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Curchod: construcción de edificio para Correos y Telecomunicaciones en Moldes, provincia de Córdoba.
- CXV.—Proyecto de ley del señor diputado Curchod: nacionalización de la maternidad Hortensia Gardey de Kowalik, de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
- CXVI.—Proyecto de ley del señor diputado de la Torre: subsidio al Hogar y Club Universitario, de la Universidad Nacional de Cuyo.
- CXVII.—Proyecto de ley del señor diputado Zavala Ortiz y otros: prórroga de arrendamientos agrícolas hasta el 31 de mayo de 1949.
- CXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: dote a la viuda del ex diputado Jabel Arévalo Cabeza.
- CXIX.—Proyecto de resolución del señor diputado Sammartino: pedido de informes sobre envío de trigo y carne al Consejo Municipal de París.
- CXX.—Proyecto de resolución del señor diputado Marotta y otros: comisión parlamentaria encargada de elaborar un proyecto sobre planeamiento regulador del Gran Buenos Aires.
- CXXI.—Proyecto de declaración del señor diputado González Funes: fijación

del precio del tomate para industrializar producido en la zona Sur de la provincia de Mendoza.

- CXXII.—Proyecto de resolución del señor diputado Colom: comisión parlamentaria encargada de estudiar los proyectos de reformas a la Constitución nacional.
- CXXIII.—Proyecto de resolución del señor diputado Mac Kay y otros: comisión parlamentaria encargada de redactar un proyecto de ley de planificación agraria.
- CXXIV.—Proyecto de resolución del señor diputado Guardo: comisión parlamentaria encargada de aconsejar medidas tendientes a la ampliación de las dependencias del palacio legislativo.
- CXXV.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:
- 1.—Del señor diputado Candioti: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo referentes a la actuación de la delegación argentina de inmigración en Europa.
  - 2.—Del señor diputado Candioti: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre conducción de las relaciones exteriores.
  - 3.—Del señor diputado Candioti: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre funcionamiento de instituciones y cámaras de comercio establecidas en el exterior.
  - 4.—Del señor diputado Candioti sobre transmisión radiotelefónica de las sesiones de la Honorable Cámara.
  - 5.—Del señor diputado Candioti y otros sobre declaración de anhelos de que los delegados argentinos no suscriban actos internacionales que impliquen la adopción de medidas armamentistas.
  - 6.—Del señor diputado Candioti y otros sobre normas de conducta de los representantes argentinos en las reuniones panamericanas.
  - 7.—Del señor diputado Candioti y otros sobre expresión de anhelos en pro de la paz universal.

- 8.—Del señor diputado Candletti: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre préstamos y donaciones a naciones europeas.
- 9.—Del señor diputado Fregossi: comisión especial encargada de redactar un código del niño.
- 10.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado por la subscripción del convento comercial Andes, celebrado con Gran Bretaña.
- 11.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de las obras de construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires.
- 12.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de las obras de construcción del dique Nihull, provincia de Mendoza.
- 13.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de la refirmación de la soberanía nacional en el sector antártico.
- 14.—Del señor diputado Visca sobre pavimentación de la ruta nacional número 8 en el tramo Arrecifes-San Pedro.
- 15.—Del señor diputado Visca sobre trámite de pedidos de informes de la Honorable Cámara a las secretarías de Estado.
- 16.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de las medidas adoptadas para solucionar la escasez de bolsas en el Sur de la provincia de Córdoba.
- 17.—Del señor diputado Visca: pedido de informes sobre nómina y actuación de representantes diplomáticos argentinos separados de sus cargos a partir del 4 de junio de 1943.
- 18.—Del señor diputado Visca: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre transporte de hacienda por ferrocarril.
- 19.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de las reparaciones efectuadas en rutas de la red de vialidad nacional.
- 20.—Del señor diputado Candletti: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre violaciones al derecho de reunión y a la libertad de información.
- 21.—Del señor diputado Visca sobre eliminación del nombre de la estación Otto Bamberg del Ferrocarril Central Argentino, en Santa Fe.
- 22.—Del señor diputado Visca sobre expresión de agrado con motivo de la adopción de medidas en favor de la economía de España.
- 23.—Del señor diputado Candletti sobre refirmación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, mar epicontinental y sector antártico.
- 24.—Del señor diputado Garofa: comisión especial investigadora de la comercialización de las cosechas de granos por parte de consorcios privados.
- 25.—Del señor diputado Cooke: comisión especial encargada de proyectar la modificación de la ley 11.723, de régimen legal de la propiedad intelectual.
- 26.—Del señor diputado Candletti sobre expresiones de condolencia a la República de Colombia con motivo de la muerte del doctor Jorge E. Gaitán.
- 27.—Del señor diputado Visca sobre terminación de las obras de revestimiento asfáltico de la ruta nacional número 9 en el tramo Zárate-San Nicolás.
- 28.—Del señor diputado Visca sobre adhesión de la Honorable Cámara a la política internacional sostenida por la representación argentina ante la IX Conferencia Interamericana.
- 29.—Del señor diputado Rojas (N.): pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre organización y funcionamiento del Instituto Nacional de las Remuneraciones y antecedentes de los conflictos gremiales ferroviario y bancario.
- 30.—De los señores diputados Zavala Ortiz y Solá: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre fijación de precio, producción y exportación de maíz.
- 31.—Del señor diputado Bustos Flores y otros: comisión especial

encargada de sistematizar los proyectos de reformas a la Constitución nacional.

32.—De los señores diputados Villafañe y Albrileu sobre construcción del camino internacional a Chile en el tramo La Rioja-Chilecito.

33.—Del señor diputado García sobre expresión de agrado de la Honorable Cámara con motivo de los conceptos expuestos sobre el coloniaje en América por el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto en la IX Conferencia Interamericana.

34.—Del señor diputado Frondizi y otros: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre aplicación de la ley 4.144, de extranjeramiento de extranjeros.

35.—Del señor diputado Frondizi y otros: normas para la aplicación de la ley 4.144, de extranjeramiento de extranjeros.

36.—Del señor diputado Candioti y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cultos que se practican en la República.

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Reynolds y Vischi.

4.—Diploma del señor diputado electo por el distrito electoral de Corrientes, doctor Joaquín Díaz de Vivar.

5.—Por indicación del señor diputado Miel Asquía se autoriza a la Presidencia a designar las comisiones permanentes de la Honorable Cámara.

6.—Fijación de días y horas de sesión.

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de mayo de 1948, a la hora 18:

## I

## VERSIONES TAQUIGRAFICAS

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la sesión con la presencia de 110 señores diputados.

Si no se hacen observaciones a las versiones taquigráficas de las sesiones celebradas los días 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre—correspondientes al período ordinario de sesiones de 1947— y el 26 de abril de este

año —sesión preparatoria del presente período—, se autenticarán y archivarán.

—Sin observación, se dan por aprobadas.

## 2

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

## I

Buenos Aires, 28 de abril de 1948.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento, en copia legalizada, el texto del decreto número 12.163, dictado con fecha 26 de abril de 1948, por el que se señala el día 1º de mayo próximo, a las 8 horas, para la solemne apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación, correspondiente al presente año 1948.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.  
Angel G. Borlenghi.

Buenos Aires, 26 de abril de 1948.

Consultadas las autoridades del Honorable Senado y Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 11, de la Constitución nacional,

El presidente de la Nación Argentina

## DECRETA:

Artículo 1º — Señálase el día 1º de mayo próximo, a las 8 horas, para la solemne apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación, correspondientes al presente año 1948.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

PERÓN.  
Angel G. Borlenghi.

—Al archivo.

## II

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1947.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad dando cuenta de la medida en que ha ejercitado la facultad acordada por los artículos 8º y 9º de la ley 12.927, de disminuir hasta un veinte por ciento los gravámenes establecidos por el texto ordenado de las leyes de impuestos internos, con el propósito de fomentar o defender determinada industria.



Al cumplir así con la formalidad establecida por el artículo 10 de dicha ley, señala a vuestra honorabilidad que la rebaja impositiva sólo la ha acordado hasta el presente con respecto a los cigarrillos, cigarrillos tipo toscano y cigarrillos, mediante el decreto 21.736, del 24 de julio próximo pasado, complementado por el 25.943, del 28 de agosto último, de los cuales se acompaña copia autenticada y en cuyos fundamentos se expresan las razones que dieron origen al ejercicio de la facultad conferida.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN,  
Ramón Antonio Cereijo.

Buenos Aires, 24 de julio de 1947.

#### VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la situación actual de ciertos sectores de la industria del tabaco demuestra la necesidad de arbitrar medidas que tiendan a la regulación del mercado, mediante la neutralización de los factores que tornan antieconómica la explotación, especialmente la de los artículos que por su precio son los que consumen los sectores económicamente menos dotados de la población;

Que la ley 12.927 faculta al Poder Ejecutivo para reducir hasta un 20 % los gravámenes establecidos por el texto ordenado de las leyes de impuestos internos, cuando ello sea necesario a fin de fomentar o defender determinada industria;

Que, sin embargo, aun con esa desgravación, los productos de bajo precio no se hallarían en condiciones de soportar el costo actual de la materia prima y mano de obra, lo que podría provocar el alza de precios con las consiguientes repercusiones en la economía de los consumidores modestos, que constituyen un elevado porcentaje, situación que el gobierno debe contemplar de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 12.830 y 12.983, ya que, si bien se trata de artículos que no son indispensables, su consumo constituye un hábito arraigado en la población;

Que, en estas condiciones, y dentro de los medios que se puede valerse el Poder Ejecutivo, se impone, además de la rebaja de impuestos a que se ha hecho referencia, la creación de un sobreprecio a exigirse por la venta de los productos de mayor precio que puedan soportarlo —de fabricación nacional o importados—, cuyo producido se destinaría a compensar a los fabricantes, en la medida necesaria, las pérdidas sufridas en la explotación de la industria de bajo precio;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina

#### DECRETA:

Artículo 1º.—Los impuestos a los cigarrillos de producción nacional a que se refiere el artículo 40 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, se aplicarán por cada «unidad básica», de acuerdo a la siguiente escala:

Los paquetes o envases que se vendan a:

|               |                      |                  |
|---------------|----------------------|------------------|
| \$ 0,10       | incluido el impuesto | pagarán \$ 0,032 |
| „ 0,20        | „ „ „ „ „            | „ 0,08875        |
| „ 0,40        | „ „ „ „ „            | „ 0,21           |
| „ 0,50        | „ „ „ „ „            | „ 0,2525         |
| „ 0,60        | „ „ „ „ „            | „ 0,305          |
| Más de „ 0,60 | „ „ „ „ „            | „ 0,3325         |

Art. 2º.—Los impuestos establecidos por el artículo 50 apartados 1º, inciso g) y 2º del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, se aplicarán de acuerdo con la siguiente escala:

- 1º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 1º, inciso g) y apartado 2º, inciso b), que se vendan a \$ 0,10, incluido impuesto, en paquetes de dos (2) a cuatro (4) unidades, pagarán por paquete el impuesto de \$ 0,0284.
- 2º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso e), que se vendan a \$ 0,20, incluido impuesto, pagarán por paquete \$ 0,0702.
- 3º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso e), que se vendan a \$ 0,30, incluido impuesto, pagarán por paquete \$ 0,0825.
- 4º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso g), que se vendan a \$ 0,32, incluido impuesto, en envases de cuatro (4) unidades, pagarán \$ 0,08448.
- 5º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso h), pagarán cada uno \$ 0,0288.
- 6º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso k), pagarán cada uno \$ 0,0536.
- 7º Los cigarrillos comprendidos en el apartado 2º, inciso m), pagarán cada uno \$ 0,0875.

Art. 3º.—Los cigarrillos de producción nacional comprendidos en el artículo 80, apartado 3º, inciso d) del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, que se vendan a \$ 0,15 incluido impuesto, en paquetes de hasta cinco (5) unidades, pagarán por paquete el impuesto de \$ 0,0528.

Art. 4º.—Inclúyese dentro de las mercaderías sujetas a las disposiciones de las leyes 12.830 y 12.983 a los cigarrillos, cigarrillos y cigarrillos de producción nacional y declárase que queda prohibida la venta de los cigarrillos de producción nacional a otros precios que no sean los indicados en el artículo 1º —con excepción de los que se expendan a más de \$ 0,60, por cada «unidad básica», y de los cigarrillos de fabricación nacional, comprendidos en el artículo 50, apartados 1º, inciso g) y 2º, que no se ajusten a los precios de venta o a sus formas de expendido indicadas en el artículo 2º de este decreto—. Asimismo queda prohibida la venta de los cigarrillos de producción nacional a que se refieren los incisos a), b) y c) del apartado 3º del artículo 50 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, y d) del mismo apartado, en cuanto no reúnan las condiciones fijadas en el artículo 3º de este decreto.

Los que infrinjan las disposiciones del presente artículo y las personas que en cualquier forma dificulten su cumplimiento serán pasibles de las sanciones previstas en las leyes 12.830 y 12.983.

Art. 5º.—Los paquetes o envases de cigarrillos de producción nacional o importados que se vendan a

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Modifícase el artículo 5º de la ley 12.703 en la siguiente forma:

Artículo 5º — Los censos escolares se levantarán cada diez años, coincidiendo con el levantamiento de los censos de población.

Art. 2º—El primer próximo Censo Escolar se levantará en el año 1950 por ser el señalado para el Censo General.

Art. 3º—Queda ratificado el decreto del Poder Ejecutivo 8.152 de fecha 20 de marzo de 1948.

Art. 4º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Balsarío Gacha Pirán. — Oscar Iwanis-sevich.

—A las comisiones de Instrucción Pública y de Asuntos Constitucionales.

XXXVIII

Buenos Aires, 23 de abril de 1948.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra aprobación el proyecto de ley de organización general de la Nación para tiempo de guerra, cuya sanción permitirá encarar con unidad de acción y de doctrina y sobre bases estables y programas concretos de ejecución, todo cuanto concierne a la preparación, organización y dirección de la defensa nacional.

La sanción de este proyecto de ley, además de satisfacer un anhelo superior, largamente esperado por los miembros de nuestras fuerzas armadas, permitirá al país consolidar y aun aumentar en alto grado su organización defensiva, mediante una coordinación adecuada de las misiones que a cada una de las fuerzas le tocará cumplir dentro del plan general de defensa, y una utilización armónica y mancomunada de todos los recursos que integran el potencial de la Nación, evitando con ello las perjudiciales consecuencias que en tiempo, energías y dinero, siempre comporta toda descentralización.

Las exigencias de la guerra moderna, que requieren la contribución integral de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, y afectan directa o indirectamente todas sus actividades e intereses, reclaman correlativamente una vasta organización y una metódica preparación que le permita lograr en el momento oportuno y con el mínimo de sacrificios, la utilización de todos los recursos de que el país dispone, y de todos los esfuerzos de que su población es capaz, para la consecución de la victoria.

Las previsiones de la defensa nacional en los tiempos modernos, no se circunscriben a satisfacer las necesidades propias de las fuerzas armadas y las tareas específicas de la movilización militar; ellas implican la solución de los vastos y complejos problemas de la movilización integral de la Nación.

El plan general de defensa nacional excede en mucho las previsiones de los planes militares propiamente dichos, involucrando una serie de planes contribuyentes: políticos, económicos, industriales, comerciales, financieros y morales, que armónicamente coordinados entre sí constituyen todo un programa de gobierno, tendiente a acrecentar el potencial de la Nación desde tiempo de paz, impulsando todas sus fuentes vitales, para hacerla moral y materialmente más fuerte para resistir y triunfar frente a las contingencias de una guerra.

Tal complejo de tareas y responsabilidades no puede quedar librado a la improvisación, o a ensayos a realizar en forma angustiosa frente a la inminencia de un conflicto, ni la inquietud que reclama la adopción de prudentes y atinadas previsiones puede ser aligerada por la reiterada consideración de que la política internacional de nuestro país, insistentemente proclamada, no sólo no abriga propósitos de expansión o predominio, sino que condena tradicionalmente toda agresión y toda conquista por la fuerza.

La guerra no es siempre un hecho deseado, la consecuencia de un acto de voluntad de parte del Estado, sino por el contrario, en muchos casos es un hecho ineludible, impuesto por circunstancias ajenas o adversas a esa voluntad. Por ello, prevenirse contra la posibilidad de un conflicto armado, en manera alguna puede significar, dentro del concepto argentino de lo que debe ser la defensa nacional, el apresto bélico para llevar por propia iniciativa el horror de la guerra a otros países, sino por el contrario hacerla imposible por el respeto que separamos merecer y por la energía que podamos emplear para defender el honor y el acervo nacional comprometidos.

Las previsiones para la defensa nacional, constitucionalmente incumben al presidente de la Nación en su carácter de jefe supremo de la misma y como comandante en jefe de todas las fuerzas armadas (artículo 86, incisos 1º y 15) y las responsabilidades de su oportuna y adecuada ejecución igualmente le concierne como presidente del Consejo de Defensa Nacional, solidariamente con los secretarios de Estado que lo integran, de acuerdo con el texto expreso de la ley 12.013, ratificatoria de los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44, que le encomienda determinar la correlación entre la política internacional y la preparación de todas las fuerzas del país, para responder a las necesidades de la defensa nacional, debiendo fijar los objetivos a alcanzar por cada una de las ramas del gobierno e impartirles las directivas generales para lograrlos, armonizando la potencialidad del país con su posición internacional y con los múltiples factores que influyen sobre el desarrollo general de la Nación.

Para cumplir con eficacia tan trascendental cometido es que el Poder Ejecutivo recaba de vuestra honorabilidad la pronta sanción del adjunto proyecto de ley, considerando que para acometer tan vasta tarea, le es indispensable estar munido del instrumento legal que le otorgue las facultades y los medios necesarios para llevar a la práctica aquellas previsiones, contando para ello con la cooperación integral de todos los habitantes de la Nación, en la medida que ello sea indispensable, y con el apoyo de todos los organismos oficiales del gobierno nacional, de las provincias y los municipios. De este

modo, con unidad de acción y coordinación de esfuerzos se hará posible el aprovechamiento útil y ordenado del potencial nacional existente y aun podrá acrecentarse en forma adecuada y paulatina, logrando al par que la ordenación y apresto de los medios defensivos de la Nación para la circunstancia eventual de una contienda, el mayor progreso y bienestar del país para la vida normal y permanente de tiempo de paz.

El proyecto de ley que se somete a la consideración de vuestra honorabilidad tiene antecedentes tan numerosos como autorizados en la moderna legislación extranjera, en una serie de leyes análogas, las cuales han sido debidamente estudiadas y ajustadas no sólo en su texto sino a través de los resultados obtenidos en cada uno de los respectivos países, tanto en las tareas de preparación durante la paz como en el período de la movilización y empleo efectivo de hombres y recursos durante la última contienda mundial. Se ha procurado así extraer las mejores enseñanzas, adecuando naturalmente los procedimientos y los organismos a nuestra organización política, a nuestra fisonomía particular y a la posibilidad de nuestros medios.

El texto, relativamente breve, del proyecto, contiene cuanto se considera básico y estructural para lograr los fines que se persiguen, sin entrar a una legislación de detalle que, aparte de revelar innecesariamente aspectos de la organización y de los métodos de ejecución de las tareas que siempre conviene mantener en discreta reserva, tendría el grave inconveniente de no permitir una rápida y fácil adaptación a las circunstancias siempre cambiantes y sorpresivas que deparan los acontecimientos en la materia, ya que para ello sería indispensable recurrir, en cada caso, a la reforma del texto legal, con la demora consiguiente.

Será por ello tarea primordial y de vasto alcance que queda reservada al Consejo de Defensa Nacional, dictar, con minuciosidad de detalles, los reglamentos correspondientes a cada uno de los rubros fundamentales que abarca el proyecto de ley que se somete a consideración de vuestra honorabilidad, tarea complementaria del aludido texto legal, que ha de ser cumplida con la cooperación técnica de todos los organismos militares existentes, y en modo especial con el asesoramiento superior del Estado Mayor de Coordinación de las Fuerzas Armadas que se crea por esta ley, y el de los organismos propios de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional y las numerosas comisiones de estudio con que cuenta.

La ejecución de los planes de defensa nacional, debidamente programados por el Consejo de Defensa Nacional, han de ser cumplidos por los organismos militares de cada una de las fuerzas armadas, de acuerdo con las directivas impartidas por el referido consejo, el que controlará y se mantendrá informado de la marcha de los trabajos, mediante el Estado Mayor de Coordinación en cuanto a las tareas que deban cumplirse por los organismos militares y por intermedio de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, con respecto a las que deban ejecutarse por los organismos civiles dependientes de los demás ministerios, secretarías de Estado y grandes reparticiones del gobierno nacional, gobiernos de provincias, territorios nacionales y grandes municipios.

El proyecto de ley contempla la posibilidad de satisfacer las necesidades propias de la movilización

de las fuerzas armadas y las que atañen a la defensa civil de la Nación, a su seguridad interior, al funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos, y al mantenimiento del ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el comercio y la industria.

Prevé de un modo general la creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento del potencial de guerra de la Nación, sin excluir por cierto la enumeración de los más indispensables, la futura creación de otros que de seguro han de sobrevenir.

Se fijan las normas fundamentales a las que ha de ceñir el Consejo de Defensa Nacional su propia organización, para resolver los problemas de coordinación en materia que atañe en común a diversos ministerios, agrupándolos en gabinetes parciales que, presididos por el jefe supremo del Estado, han de hallar soluciones rápidas y definitivas en tales casos. Se prevé en tal sentido la necesidad, desde tiempo de paz, de organizar tres gabinetes parciales, admitiendo la posibilidad de otros, así como la creación de nuevas secretarías de Estado para atender nuevas actividades de tiempo de guerra o descentralizar las tareas que tienen asignadas en tiempo de paz.

Contempla las necesidades de la conducción superior de la guerra en su aspecto politicomilitar, constituyendo al efecto el Gabinete de Seguridad Exterior, dotándolo del organismo asesor correspondiente —que lo es el Estado Mayor de Coordinación— cuya creación está prevista en la ley y cuyas funciones y detalles de organización serán precisados en el decreto reglamentario pertinente.

Prevé la designación para caso de guerra del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, establece su dependencia directa del presidente de la Nación (Gabinete de Guerra), fija sus organismos asesores y determina cuáles serán los altos comandos que le estarán sometidos para la conducción de las operaciones terrestres, marítimas y aéreas, sin perjuicio de la dependencia administrativa que cada una de las fuerzas sigue manteniendo con los respectivos ministerios de conformidad con sus leyes orgánicas.

Se contempla la división del país en tiempo de guerra, de acuerdo con las necesidades que la contienda imponga, precisando las características fundamentales que en materia legal y de gobierno han de imperar en las zonas de operaciones, zonas de guerra y zona del interior, a fin de garantizar en lo posible, sin temer las actividades militares ni dificultar las operaciones, que subsistan las normas, autoridades y procedimientos de tiempo de paz.

Se adoptan las provisiones necesarias para lograr la entrada en acción inmediata de todos los medios que aseguren la defensa activa del territorio contra los ataques aéreos, mediante la creación del organismo coordinador que determinará la distribución y empleo de los recursos con que cuenta la Nación para tales fines.

Finalmente se establece cuál será el organismo centralizador que preparará y dispondrá adecuadamente de los medios con que se hará efectiva, en todo el país, la defensa pasiva del territorio, contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios, gases, invasión de paracaidistas, etcétera), instruyendo y ejercitando a la población para prevenir y entorpecer la acción del enemigo, así como para reducir o reparar los estragos causados, resta-

bienciendo el orden interno, la buena marcha de los servicios públicos, la rehabilitación del trabajo en los establecimientos de producción para la guerra y para la subsistencia del frente interior, asegurando la normalidad en todas las actividades de la población.

Se establecen las bases legales para la prestación obligatoria del servicio civil de defensa, precisando los deberes a que estará sometida la población para su instrucción y ejercitación en tiempo de paz y su empleo efectivo en tiempo de guerra, así como la determinación de los límites de duración de dichos servicios y de las indemnizaciones que deberán hacerse efectivas por el Estado en uno y otro caso.

Del mismo modo se fijan las bases legales a las cuales han de ser sometidas las requisiciones de los establecimientos industriales, plantas de elaboración y demás bienes o servicios que necesite realizar el Estado en tiempo de guerra para proveer a la defensa nacional. En tal virtud se establece con precisión en qué tiempo, con qué formalidades y por qué autoridades se podrán realizar aquellas requisiciones, y se fija el procedimiento administrativo y judicial a que han de ajustarse para hacer efectivo el principio de que toda requisición da derecho a una retribución equivalente al justo valor de los bienes o servicios en el momento de ser requeridos.

Por último se fijan cuáles han de ser las sanciones aplicables en tiempo de paz y en tiempo de guerra para quienes violaren los preceptos de la presente ley, dejándose a las autoridades encargadas de aplicarla un margen grande entre las penas mínimas y máximas, como el mejor medio para adecuar con equidad y en cada caso la sanción a la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la importancia circunstancial de la misma, el daño ocasionado al servicio o al patrimonio del Estado y, en manera especial, a las previsiones de la defensa nacional, a la realización de las operaciones militares y a la conservación de la disciplina.

Igualmente se faculta al Poder Ejecutivo para que en tiempo de guerra pueda establecer un régimen disciplinario que garantice la efectividad de los servicios de la defensa civil, el mantenimiento del orden y la continuidad de los servicios públicos, así como la concurrencia y disciplina del trabajo en los establecimientos de producción —militar o militarizados— sin recurrir obligada y sistemáticamente a la aplicación de las leyes penales militares, a condición de que las penas así establecidas sean menos severas que las previstas para el caso por el Código de Justicia Militar para la represión de los mismos delitos.

Y en el mismo sentido se dispone, por último, que el Poder Ejecutivo podrá establecer que los movilizados en el servicio civil de defensa sean juzgados, aun en tiempo de guerra, por los tribunales de la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales militares, respecto de las sanciones previstas por la presente ley.

Se establece así la posibilidad legal de que el Poder Ejecutivo pueda crear sistemas intermedios, menos rígidos que el sistema penal militar, para los casos en que las leyes actuales autorizan la vigencia del Código de Justicia Militar.

Del análisis que se deja expuesto podrá apreciar vuestra honorabilidad la importancia que, con fundadas razones, asigna el Poder Ejecutivo al proyecto de ley de organización general de la Nación para tiempo de guerra. Con ella, las previsiones de la defensa

nacional entrarán en un período de fecundas realizaciones, y el país habrá dado un paso decisivo y trascendente en el sentido de asegurar la integridad de su territorio y el patrimonio de la Nación, refiriendo su condición de pueblo libre, respetado y respetuoso de la soberanía de los Estados.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

José Humberto Sosa Molina, — Fidel L. Auadón.

#### PROYECTO DE LEY

El Senado\* y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, compete solidariamente con los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación, organización y dirección de la defensa nacional.

Art. 2º — Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra, deberán ser adoptadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer esas previsiones hasta en sus menores detalles, corresponderá a los ministerios o secretarías de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la coordinación, crease especialmente el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 3º — Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas tendientes a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización para tiempo de guerra.

Para ello impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:

- a) La movilización de todas las fuerzas armadas de la Nación;
- b) La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos, y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el comercio y la industria;
- c) La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y materiales del país;
- d) La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento del potencial de guerra de la Nación.

Art. 4º — Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación para la guerra, serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros, constituido en Consejo de Defensa Nacional.

Para la resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo requiera la intervención de algunos de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de la Nación, a fin de lograr una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los trámites, podrá constituir, dentro del Consejo de Defensa Nacional, comisiones ministeriales o gabinetes parciales.

Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en los acuerdos parciales de gabinete, tendrán la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.

Art. 5º — Si en tiempo de guerra fuera necesario atender nuevas tareas o descentralizar las que actualmente atienden los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo plenario, podrá ampliar el número de secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal caso, los decretos emanados de dichas secretarías de Estado, llevarán, además de la firma de su titular, la de alguno de los ocho ministros permanentes.

El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar funciones ejecutivas o de control, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el Plan General de la Defensa Nacional.

Art. 6º — Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley y los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44 (ley 12.913), serán cumplidas por intermedio de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.

La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto del cual se informa acerca de su cumplimiento.

Art. 7º — El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz, la misión, atribuciones y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige, fomenta, regula o fiscaliza.

Art. 8º — La movilización de las fuerzas armadas está regulada por las leyes y reglamentos militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo con la orientación fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 9º — La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes en cada secretaría de Estado.

Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa Nacional y bajo el control directo de la secretaría de dicho consejo.

A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias a las distintas direcciones de defensa; y controlará, por intermedio de los jefes militares de las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de Defensa Nacional.

Art. 10. — Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las necesidades de las fuerzas armadas y ministerios civiles.

Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la Nación, los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización industrial, la distribución de la mano de obra y las materias primas, y todo lo concerniente al abastecimiento general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción económica.

Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las fuerzas armadas, para movilizar el personal que posea aptitudes o conocimientos especiales para el servicio aeronáutico.

Art. 11. — La conducción de la guerra, en su aspecto policomilitar, compete directamente al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra, Marina y Aeronáutica, constituidos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (o Gabinete de Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.

Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros que lo integran.

La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro de su respectiva rama de gobierno.

Se organizarán además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior, un Gabinete de Seguridad Interior; integrado por los secretarios de Estado en las carteras de Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica integrado por los secretarios de Estado en los departamentos de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido por el ministro de Hacienda para la coordinación de los problemas de los abastecimientos, la producción, el comercio y las finanzas.

Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan, según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.

Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios o secretarías.

Art. 12. — El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción de la guerra y de la mayor coordinación de las fuerzas armadas en las operaciones conjuntas, será asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación, el que lo estará directamente subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los estados ma-

yores generales del ejército, la armada, y la fuerza aérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.

El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de los organismos propios de que dispondrá este último, contarán para la realización de sus trabajos, por intermedio del jefe de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los subjeses militares, del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha secretaría.

Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos subjeses de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la secretaría.

Art. 13. — En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación proclamará a la designación del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.

A los efectos de la conducción de las operaciones, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en jefe de todas las fuerzas.

Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante en jefe del ejército de campaña; las operaciones marítimas y fluviales por el Comandante de Operaciones Navales; y las aéreas por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las operaciones, del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la administración y gobierno de las fuerzas a sus órdenes, dependerán como siempre de los respectivos secretarios de Estado.

Art. 14. — En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más Zonas de Operaciones y en una Zona del Interior.

Se declararán Zonas de Operaciones Terrestres las partes del territorio nacional en que deban operar los ejércitos en campaña.

Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declararán una o varias Zonas de Operaciones Navales en el mar, ríos, costas o islas adyacentes.

Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevaiente por las fuerzas aéreas, aquella podrá ser declarada Zona de Operaciones Aéreas.

Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de los comandantes en jefe, elevadas por intermedio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y las aguas nacionales, y el espacio adyacente hasta el límite del radio de acción de las aeronaves.

Art. 15. — El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones, ejerce la autoridad total del go-

bierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha autoridad en los Comandantes de Ejércitos, Escuadras, Fuerzas Aéreas o Comandantes de unidades operativas independientes, respecto a las zonas en que aquéllos actúan.

Los comandantes que ejercen la autoridad total, están facultados para imponer la ley marcial dentro de las respectivas zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones con fuerza de ley que las necesidades de la guerra impongan.

En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener en el ejercicio de sus funciones.

Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, y que fueren designados o confirmados en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones judiciales.

Art. 16. — Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones, el Comando Superior de la misma tendrá adscrito un Delegado Civil para cada provincia, territorio nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.

Los Delegados Civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministros de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica según el caso.

Serán designados Delegados Civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos, quedaren comprendidos dentro de los límites de la zona de operaciones.

Los Delegados Civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo, la autoridad que a éste le compete, en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.

Art. 17. — La Zona del Interior comprende todo el territorio del país que no haya sido declarado Zona de Operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.

La Zona del Interior es única para las tres fuerzas armadas y en ella el comandante general del Interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la movilización, abastecimientos y transportes de las fuerzas armadas de acuerdo a las directivas impartidas por el Consejo de Defensa Nacional; así como aquellos relacionados con la seguridad de la Zona del Interior.

Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados por representantes de la Marina y Aeronáutica.

Art. 18. — Dentro de la Zona del Interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto Zona de Guerra sometidas a la jurisdicción de las autoridades militares y al régimen disciplinario de los tribunales militares, las bases navales y aéreas, los recintos fortificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas de transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales, usinas, talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de

guerra o a cubrir las necesidades de la defensa nacional, y de manera general, todo recinto militar o militarizado, a condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar efectiva y ostensible.

Art. 19. — La adopción desde tiempo de paz, de las provisiones necesarias para la entrada en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica, quienes armonizarán y coordinarán la distribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros medios que se disponga para tales fines.

Art. 20. — El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios, gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país, con excepción de las bases y demás dependencias aéreas y navales que quedan sometidas a las provisiones adoptadas por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.

A tales fines la Defensa Antiaérea Territorial Pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas a prevenir y entorpecer los ataques enemigos así como a reducir y reparar los estragos causados, restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial y demás actividades de la población.

Art. 21. — Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la coordinación de las medidas y provisiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.

Art. 22. — Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta, son considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país, nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 23. — Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y provisiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones públicas y privadas y los servicios o instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.

Art. 24. — Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior - Comando de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz las provisiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas medidas impondrán en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones, las normas de seguridad a que deberán ajus-

tarse. En las construcciones existentes, dispondrán las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas, de sus habitantes y vecinos.

Art. 25. — Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar a la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite, el Estado compensará las horas excedentes de acuerdo al salario medio horario que perciba el convocado, determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por el artículo 5º y 6º del decreto reglamentario de la ley 9.988, de fecha 14 de enero de 1910, el que no podrá exceder en ningún caso de dos pesos por hora.

Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.

Art. 26. — El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales, en tiempo de paz, el personal afectado al Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial Pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.

Establecerá asimismo, la organización de los servicios y controles de instrucción necesarios, otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectiva la obediencia y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de las sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de \$ 5 a 1.000 por la primera y segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia.

Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, regirán las disposiciones del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial Pasiva como para el convocado al servicio militar.

Art. 27. — El Servicio Civil de Defensa Nacional (ley 12.913, artículos 1º y 3º), es el conjunto de obligaciones que el Estado impone a sus habitantes no movilizados para el servicio militar a los efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo que la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las fuerzas armadas, el mantenimiento del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción intensiva de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente interior, afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población civil.



La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea necesaria a los fines de la defensa nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.

Art. 28. — En tiempo de guerra el Servicio Civil de Defensa Nacional lo cumplen todos los habitantes del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, incluidos los extranjeros, como súbditos temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.

En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y los extranjeros voluntarios o contratados.

Excepcionan de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades diplomáticas.

El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con carácter general las demás excepciones que considere pertinentes.

Art. 29. — La preparación de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar, dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.

Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría) existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:

- Una Comisión de Zonas de Seguridad.
- Una Comisión de Movilización Industrial.
- Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.
- Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.

Art. 30. — En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones que sean indispensables para proveer a las necesidades de la defensa nacional.

A tales fines podrá requisar:

- a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación del Servicio Civil de Defensa Nacional;
- b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes dentro del territorio de la Nación;
- c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país o sus agencias territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la Nación;
- d) Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier invento.

Art. 31. — A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados sino a los fines

exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.

Art. 32. — El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.

Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de los bienes en el momento de ser requisados.

Únicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del Poder Ejecutivo.

El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas por funcionarios del Estado nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales) y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles ante la Justicia Federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios afectados.

Art. 33. — Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los habitantes obligados a prestar el servicio civil de defensa nacional, para trabajar por cuenta del Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que funcionen en interés de la Nación.

Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos especiales.

La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma colectiva comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa, considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.

Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en instituciones privadas, podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o bien llamados a otras tareas teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e intelectuales.

El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil, será fijado por la autoridad requiriente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada a la cual este empleo es asimilado.

Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corrientes en la industria respectiva o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en el lugar.

El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio ulterior a la autoridad que le confirió el destino de movilización.

Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el autor de la divulgación el delito de violación de secreto previsto y penado por los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación.



Art. 34. — Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la defensa nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:

- 1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas.
- 2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas particulares.
- 3º Los viveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado.
- 4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa.
- 5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter militar.
- 6º Las atalayas, el ganado, los vehículos hipomóviles y automóviles destinados a la carga y al transporte.
- 7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas, ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de matrícula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para su utilización.
- 8º Las aeronaves de matrícula nacional y al personal, instalaciones y material necesario para su utilización.
- 9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelan el territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras.
10. Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias del país de acuerdo a los artículos 19, 20 y 21 de la ley 2873.
11. Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas, telefónicas y radiocomunicaciones.
12. Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos.
13. Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos de la agricultura, ganadería o industria de elaboración.

Art. 35. — La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales, puede ser efectuada a título de dominio o a título de uso.

La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales, fábricas, talleres, equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.

La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos. Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de trabajo compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En estos casos, corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos establecimientos.

También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas, talleres, etcétera, sin tomar posesión de las mismas. En este caso, seguirán en manos de las empresas o propietarios

particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.

El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario particular, no impide al contralor de fabricación ni a la vigilancia y custodia militar del establecimiento.

El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el Servicio Civil de Defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la Zona del Interior, y la autoridad militar en las zonas de operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra, conforme a lo establecido por el artículo 119, inciso 1º, del Código de Justicia Militar, o declare zona de guerra, al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etcétera.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las obligaciones establecidas en la misma, sanciones consistentes en multa de \$ 5 a \$ 1.000, por la primera y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que correspondan aplicar a los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes.

Decreto de la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el Servicio Civil de Defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de pertenecer al sexo femenino o ser menor de 18 años o mayor de 60 para los convocados varones.

Art. 37. — El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne a la movilización del Servicio Civil de Defensa, censos y requisiciones, movilización industrial y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio, la desobediencia, las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la jerarquía técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo, así como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por

el Código de Justicia Militar para la represión de los mismos delitos.

El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer mientras lo crea oportuno que los movilizados en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aun en tiempo de guerra por los tribunales de la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la Justicia Militar respecto a la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.

Art. 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*José Humberto Sosa Molina. — Fidel L. Amadón. — Bartolomé de la Colina.*

*—A la Comisión de Defensa Nacional.*